

PACTO FISCAL: ¿CÓMO FINANCIARÁ EL PAÍS SU DESARROLLO?

Página 2-4

Págs. 5-11

**Resultados y diferencias
de los censos 2001 y 2012**

Un resumen muestra datos
comparativos de población.

Págs. 16-17

**El control social reemplaza
a los comités de vigilancia**

Nueva forma de participación
social rige en los municipios.

Págs. 17

**La deuda externa del país
sube a \$us 4.900 millones**

La tendencia es creciente,
ésta vez por bonos soberanos.

**NEGOCIAR EL NUEVO PRECIO Y GARANTIZAR RESERVAS SERÁN
ASPECTOS SENSIBLES DE FUTURA VENTA DE GAS A BRASIL**

Págs. 12-13

EL PACTO FISCAL DA LA OPORTUNIDAD DE DEFINIR CÓMO SE FINANCIARÁ EL DESARROLLO

Uno de cada tres bolivianos de los ingresos fiscales – con los que se financian los diferentes niveles de gobierno– proviene de la venta de recursos naturales, ingresos que no tienen una sostenibilidad garantizada en el largo plazo. Por otro lado, el aporte ciudadano a través del pago de impuestos es reducido y desigual; además, dos de cada tres trabajadores no tienen empleo formal.

En lo referente a los gobiernos departamentales y municipales, éstos tienen restringidas las posibilidades de generar ingresos tributarios, por lo que su gestión se mantiene con una alta dependencia de las transferencias presupuestarias desde el Gobierno central.

A pesar de esta situación, es posible proyectar el desarrollo del país. El pacto fiscal es una oportunidad y un espacio de concertación entre la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno para definir cómo se generarán los recursos garantizando su sostenibilidad, qué instancias los administrarán y ejecutarán, y en qué deberán ser gastados e invertidos.

El proceso Constituyente ha permitido definir competencias y un nuevo diseño de Estado con autonomía para los gobiernos subnacionales. Queda pendiente el tratamiento de temas como la generación, distribución y destino de los recursos públicos.

En este artículo se aborda el tema de la generación de recursos.

Sostenibilidad

Los principales ingresos que recibe el Estado son, por un lado, los impuestos y, por otro lado, los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, a través de regalías por hidrocarburos y

minería, y el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos).

Una de las principales diferencias entre ambos es que los impuestos son ingresos que el Estado recauda de manera recurrente por diferentes conceptos, como las utilidades de las empresas, las ventas, el consumo, etc. Y los segundos (regalías y otros) son ingresos que se reciben por la explotación y venta de recursos naturales, como hidrocarburos y minerales, que no son renovables, y su sostenibilidad depende de diferentes factores, puesto que tienden a agotarse en el largo plazo, además que dependen de precios internacionales.

Al analizar los ingresos del Estado, se advierte la alta dependencia que actualmente tiene el país de los recursos provenientes de la renta extractiva.

Una tercera parte de los ingresos fiscales proviene de la explotación de hidrocarburos y minerales, es decir que los ingresos son muy vulnerables a la disponibilidad de estos recursos y de los precios internacionales (ver cuadro y gráfico). Asimismo, este sector depende de las reservas que se tengan, de las inversiones y de acceso a mercados.

Incluso una parte de los ingresos tributarios también proviene de las actividades de los sectores extractivos, como hidrocarburos, lo que revela la preponderancia de estos sectores en la economía.

Si bien en los últimos años se presentaron superávits en el presupuesto nacional, se debe tomar en cuenta que esta mejora en la situación actual fue posible principalmente por los mayores ingresos económicos provenientes de fuentes extractivas. Por tanto, surge la preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo,

más aun considerando la ampliación del gasto público que se ha dado en los últimos años, incluyendo el pago de bonos, como la renta dignidad.

Sistema tributario

Debido a la alta dependencia que tienen los ingresos fiscales del aporte proveniente de la renta extractiva queda preguntar cuál es la situación de los impuestos que el Estado genera.

El sistema tributario en Bolivia data del año 1986 (cuando se inició el ciclo neoliberal), aprobado con la Ley N° 843 y algunas modificaciones y complementaciones posteriores, especialmente el año 1994, con la aprobación de la Ley 1606. Los principales impuestos son al Valor Agregado (IVA), Utilidades de las Empresas (IUE), Transacciones (IT), Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), y al Consumo Específico (ICE).

La Constitución Política del Estado, artículo 108, establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica.

Por otro lado, el artículo 323 señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Al efecto, urge responder si estos mandatos constitucionales se estarían cumpliendo y en qué medida.

El tema del sistema impositivo es bastante amplio y requiere de una profundidad en su análisis; sin embargo, se pueden citar algunos elementos que ponen de manifiesto la necesidad de debatir el actual sistema tributario y la vigencia de su diseño en la actualidad.

Renta
Extractiva
33%

Ingresos
Tributarios
(Renta Interna y
Aduanera) y otros
67%

Ingresos fiscales (En millones de Bs)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ingresos Tributarios (Renta interna y aduanera) y otros	9.868	9.768	10.145	10.450	13.371	15.852	18.462	21.163	26.019	26.459	28.006	36.425	41.937
Renta extractiva	1.247	1.455	1.348	1.813	2.416	5.139	9.053	9.808	10.938	10.710	11.426	14.958	20.321
Regalías mineras	49	41	48	50	83	120	408	542	688	549	795	1193	967
Regalías por hidrocarburos	1.198	1.414	1.300	1.763	2.333	2.698	3.148	3.312	3.606	3.696	3.887	4.769	7.243
IDH hidrocarburos						2.321	5.497	5.954	6.644	6.465	6.744	8.996	12.111
TOTAL	11.115	11.223	11.493	12.263	15.787	20.991	27.515	30.971	36.957	37.169	39.432	51.383	62.258

Elaboración propia con base en la Memoria de la Economía 2012 del MEFP. Gobierno General.
Incluye ingresos tributarios, impuestos s/hidrocarburos, venta de bienes y servicios, y otros ingresos.

El sistema tributario en Bolivia está sostenido principalmente por impuestos indirectos, es decir que no gravan directamente a fuentes de riqueza, a la propiedad o a los ingresos, sino gravan indirectamente a la población por lo que consume. Es decir, que el tratamiento es igual para ricos y pobres. Un ejemplo de este tipo de tributo es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, además, es la columna vertebral del sistema impositivo en el país.

Al respecto, un sistema progresivo es aquel que obtiene un porcentaje más alto de recursos de los contribuyentes que tienen mayor capacidad de pago. Y los impuestos indirectos, como el IVA, son generalmente considerados como impuestos regresivos o que no contienen elementos de progresividad.

Según el especialista en temas tributarios, Alberto Barreix, la imposición a la renta personal (o ingreso personal) es el instrumento tributario casi único con capacidad redistributiva en el mundo.

Al respecto, es importante tomar en cuenta que en Bolivia, a diferencia de la mayoría de los países, no existe un im-

puesto al ingreso personal (el RC-IVA ha sido diseñado y funciona más como un mecanismo de control del IVA).

Para dar un ejemplo, en el país existe un impuesto a las empresas de 25% sobre las utilidades, pero no existe un impuesto a la renta de las personas. Sin embargo, detrás de las empresas hay personas o dueños de empresas que reciben sus beneficios o ganancias, así como gente que recibe salarios. Estas rentas no están sujetas al pago de impuestos.

Por otro lado, respecto a la cobertura del sistema tributario, de acuerdo con datos de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales del Gobierno, aproximadamente dos terceras partes del empleo en Bolivia están en el sector informal (dato al año 2010); y no obstante a que no se tienen datos oficiales al respecto, haciendo un análisis de percepción, se puede observar que hay sectores a los cuales el sistema impositivo no llega y que justamente son sectores que generan grandes ingresos personales.

De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Nacionales, 100 empresas aportan el 74% de la recaudación, lo cual

muestra la baja cobertura del padrón.

Otro aspecto es la distorsión y efecto perverso que generan los Regímenes Especiales (simplificado y otros) puesto que incentivan a cometer contravenciones e incluso delitos tributarios.

Queda el desafío de que el sistema impositivo amplíe su llegada de manera que todos tributen de acuerdo con su capacidad económica para lo cual, además, será importante avanzar en una formalización de la economía.

Las autonomías

La Constitución Política de Estado otorga a los gobiernos departamentales y municipales la competencia de crear y administrar impuestos de carácter departamental y municipal, respectivamente.

De acuerdo con la Ley Marco de Autonomías, la administración de los recursos de las entidades territoriales están sujetas a la autonomía económica financiera, que implica ejercer las facultades para generar y ampliar los recursos económicos y financieros, en el ámbito de su jurisdicción. Posteriormente, se aprueba la Ley de Clasificación y Creación

de Impuestos; pero, en su clasificación, no deja espacio para que los gobiernos subnacionales puedan realmente generar mayores recursos, o que en cierta medida se descentralice el sistema tributario.

La mayoría de los municipios sólo recauda el 11% de sus ingresos, su presupuesto es sostenido por transferencias del Nivel Central.

Un aspecto bastante relacionado a la descentralización de los impuestos es el sentido de correspondencia o vínculo entre el esfuerzo que hacen las personas al tributar en un determinado espacio territorial y los beneficios de los servicios públicos que reciben.

Actualmente, en el diseño del sistema impositivo, coparticipación y definición del gasto no está presente este sentido de correspondencia. Los habitantes de un determinado territorio –como puede ser un municipio– conocen claramente y defienden el derecho que tienen para recibir los recursos de coparticipación de impuestos; sin embargo, no son conscientes de la obligación que tienen de tributar.

Incorporar este tipo de elementos es fundamental para ampliar la capacidad del Estado para recaudar mayores ingresos.

Al respecto, este es un tema pendiente y que podría ser tratado de manera integral al analizar el sistema impositivo y de coparticipación en Bolivia, siendo el pacto fiscal el espacio para poder discutir y lograr consensos.

Corren los plazos para la presentación de la propuesta técnica de diálogo para el pacto fiscal, conforme a los plazos fijados por la Ley Marco de Autonomías, y es fundamental que este espacio aborde los temas pendientes relacionados a la generación de ingresos públicos de manera que se reoriente hacia un sistema y mecanismos que otorguen a las recaudaciones y, por tanto, a las finanzas públicas, la sostenibilidad, progresividad y justicia en sentido de que todos aporten.

Jóvenes que se forman en liderazgo harán un simulacro de pacto fiscal

El primer curso virtual “Jóvenes Líderes en Democracia y Desarrollo” se inició con la participación de 150 estudiantes universitarios de Tarija, Santa Cruz y La Paz, a iniciativa y coordinación de Fundación Hanns Seidel y Fundación Jubileo.

De las primeras actividades se destaca la responsabilidad de participación y análisis crítico manifestadas en el aula virtual, a través de la página web de Fundación Jubileo (www.jubileobolivia.org.bo), apropiando herramientas tecnológicas modernas en propósitos educativos.

Los estudiantes identifican a la corrupción, a las desigualdades sociales y económicas, a la debilidad de la institucionalidad estatal y a la exclusión de la juventud de espacios de participación como aspectos que provocan la poca valoración o desinterés de la juventud por la democracia.

El curso está organizado en tres módulos: 1) Democracia y Participación, 2) Pacto Fiscal y 3) Desarrollo Humano Integral.

En el aula virtual se desarrollan actividades y recursos que permiten compartir lecturas temáticas, tareas o trabajos prácticos, foros de debate y otras actividades realizadas por internet.

El curso se inició el 23 de septiembre

y concluye el 16 de noviembre. En ese lapso también se realizarán dos actividades presenciales, encuentros locales en cada ciudad y un encuentro nacional con jóvenes de las tres ciudades donde se profundice los contenidos de formación.

Uno de los eventos más importantes será la realización de un simulacro de participación en el Pacto Fiscal, con el propósito de provocar propuestas desde las y los jóvenes, orientadas a aportar al debate nacional.

Las expectativas de estudiantes, de 20 a 25 años de edad, también demuestra la gran demanda de espacios de formación y participación que exige este grupo generacional.



UN REPASO AL PROCESO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012

Una cadena de observaciones durante todas las etapas del Censo 2012 fueron advertidas por instancias de la sociedad civil. Los resultados del proceso censal podrían influir en la planificación del país, debido a la calidad de los datos.

Las principales debilidades fueron la cartografía por actualizar, la boleta que generó diversos cuestionamientos, las dificultades en el reclutamiento, la insuficiente capacitación de los empadronadores, la reprogramación de fechas de los hitos censales, el cambio en el método del procesamiento de datos, además de las renunciaciones de ejecutivos encargados del Censo y la excesiva intervención del Ministerio de Planificación sobre el INE, entre otras causales.

Desde el inicio del proceso, Fundación Jubileo y otras instituciones insistieron en la necesidad de velar por la calidad de la información y la importancia de disponer de datos actualizados que reflejen la realidad del país, considerando la importancia para la planificación del desarrollo.

El 21 de noviembre de 2012 se realizó el onceavo Censo Nacional de Población y, a la vez, el quinto Censo de Vivienda.

Postergación de fechas

El censo de población debía realizarse al menos cada 10 años. Inicialmente se consideró para julio de 2011; pero fue postergado para fines de 2012, debido a factores climatológicos, de financiamiento y por la necesidad de preparar “las actividades censales con anticipación”.

En agosto de 2012 se definió que la fecha sería el 21 de noviembre, decisión gubernamental que fue objetada porque la experiencia en censos aconsejaba realizar

el empadronamiento en época seca, entre mayo y julio. El mismo proyecto censal había contemplado el mes de junio.

Durante el 21 y 23 de noviembre de 2012 se registraron lluvias afectando el trabajo de campo en algunas poblaciones, con mayor perjuicio en el desplazamiento de los encuestadores en el noreste del país.

Base cartográfica

La cartografía censal es un elemento imprescindible para planificar y distribuir cuántos empadronadores y boletas son necesarias. No disponer de esta información actualizada o inconclusa tiene como consecuencia la falta de precisión de la cantidad de habitantes y viviendas de forma desagregada, y que serviría como base para futuras investigaciones.

Cuando faltaban seis meses para la nueva fecha del censo, sólo se había actualizado la cartografía de Beni y Pando. Restando escasos cuatro meses para la fecha del CNPV 2012 la actualización cartográfica multipropósito no había concluido.

El 21 de septiembre de 2012, el INE informó que la actualización cartográfica habría concluido y reportó que contabilizó el número de viviendas, estableciendo 180 mil segmentos censales.

Ante los conflictos de límites entre departamentos y municipios, el INE determinó codificar y clasificar con el número cero los lugares donde existen estos problemas. Hasta el momento, el INE no demostró la consistencia técnica que respalde cómo delimitó el territorio para asignar población en áreas en conflicto, considerando que el 31 de julio se entregaron los resultados del Censo y ese mismo día se emitió el Decreto Supremo N° 1672, referido a la redistribución de recursos de coparticipación tributaria.

Ante solicitudes para que se difunda la cartografía utilizada en el CNPV 2012, el nuevo Director del INE respondió que “la cartografía estadística multipropósito se encuentra en elaboración y la misma estará disponible cuando se termine el procesamiento de la información que se viene recabando con el Censo Agropecuario, a mediados del próximo año”.

La boleta

El INE propuso una boleta con 63 preguntas que fueron probadas en un solo censo piloto realizado en junio de 2012, en la localidad de Guaqui. Para el censo 2001 se realizaron tres pruebas, contemplando cada una de las regiones ecológicas: altiplano, valle y llano.

La boleta, finalmente, tuvo 49 preguntas. El proceso de divulgación fue mínimo y sin reportes de haber existido un consenso. Instituciones y organizaciones que conformaron la plataforma denominada “La Ruta del Censo 2012” observaron 17 preguntas; también recomendó incluir aspectos sobre temas laboral, seguridad alimentaria e inseguridad ciudadana; pero el INE no atendió estas sugerencias.

La boleta censal se presentó oficialmente el 8 de agosto de 2012. En medio de una polémica sobre el término “mestizo”, en el acápite referido a la autoidentificación étnica (pregunta N° 29), se generó una contradicción entre la Ministra de Planificación y el Director del INE, dejando confusión si la respuesta sería abierta o cerrada, y si el empadronador consideraría o no anotar el término mestizo⁽¹⁾.

Estas ambigüedades se habrían manifestado como “errores ajenos al muestreo” y, por la inconsistencia en el manejo de conceptos y definiciones,

tendría como consecuencia errores en la construcción de la base de datos.

Reclutamiento

Respecto del número de empadronadores, en agosto de 2012, el INE indicó que se necesitarían al menos 230 mil agentes censales. En septiembre, la ministra de Planificación, Viviana Caro, dijo que se requerirían 218 mil; pero poco después el INE se refirió a 200 mil personas necesarias. El dato final señalaba que se requirieron 216 mil empadronadores⁽²⁾.

La mesa de trabajo “La Ruta del Censo 2012” recomendó que los empadronadores sean universitarios de últimos años y profesionales del magisterio. Como no se coordinó con antelación y ante la falta de empadronadores, se recurrió al apoyo de conscriptos, estudiantes de último año de colegios, normalistas, además de servidores públicos.

A 16 días de la realización del Censo (21 de noviembre), la ministra de Planificación informó que sólo existían 50 mil voluntarios empadronadores, y sostuvo que en las áreas rurales se llegó a 75% de empadronadores y en los departamentos de Pando, Beni, Tarija y Potosí a poco más de 50%⁽³⁾. Quedaba menos de un mes y recién se instruyó a direcciones departamentales de educación, direcciones distritales, direcciones de unidades educativas, maestros y estudiantes a participar como agentes censales.

Faltando 10 días, el Gobierno anunció que se completó el reclutamiento; pero hasta antes de tres días los jefes de zona advertían sobre la falta de empadronadores, jefes de sector y recursos económicos para convocar a los inscritos⁽⁴⁾.

Capacitación

A 71 días de la realización del CNPV 2012, al INE le faltaban capacitadores, por lo cual lanzó una convocatoria masiva para emplear a 2.522 en estos cargos. La estrategia de capacitación y comunicación, según autoridades del INE, debía

estar cuatro meses antes del operativo censal, lo que no ocurrió ante la falta de definición del contenido de la boleta censal y manuales. Hasta esa fecha no empezó la capacitación de encuestadores y no habían campañas masivas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. La capacitación se inició en octubre y en casi todos los departamentos se reportaron dificultades por la falta de aspirantes.

La capacitación de agentes censales debía durar al menos dos días (16 horas). Ante la proximidad del día del empadronamiento y la falta de personal, se puso como excusa la etapa de finalización del año escolar y, para no perjudicar la formación de los estudiantes, el INE acordó que la preparación que debía ser de dos jornadas se sistematice y reduzca a una jornada de ocho horas; pero por el registro y capacitación de nuevos empadronadores la instrucción para el llenado de la boleta censal se redujo a cuatro horas. En el caso de los estudiantes de la UMSA, duró sólo dos horas⁽⁵⁾.

Algunos empadronadores dijeron “que la capacitación no fue suficiente para entender las 49 preguntas de la boleta”⁽⁶⁾.

Fallas logísticas

El Director del INE no precisó sobre la cantidad de boletas necesarias. El 23 de agosto detalló que se imprimirían 3 millones de boletas, luego indicó que serían 3,5 millones. Por fuente de la imprenta contratada, se supo que el pedido fue de 3.000.100 boletas; pero la Ministra informó que el total de boletas censales recibidas de la imprenta alcanzó a 4 millones de unidades⁽⁷⁾.

El resultado de viviendas empadronadas fue de 3.158.691, teniendo un sobrante de 841.309 boletas.

Como el trabajo de logística estuvo centralizado en la ciudad de La Paz, el envío y recepción de boletas hacia y desde las regiones también tuvo problemas. Durante el empadronamiento hubo quejas y solicitudes por la falta de boletas cen-

sales en diferentes barrios de las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, además de poblados como Caranavi y Patatamarca, y Nor Cinti en Chuquisaca⁽⁸⁾. En Pando, el Gobernador informó que faltaban 2.000 boletas⁽⁹⁾.

Empadronamiento

Ante la susceptibilidad por pertenencia territorial de las comunidades hubo retrasos el día del censo. Por otro lado, en algunas localidades dijeron que no habían llegado las boletas hasta las 18:00 horas del día del empadronamiento. Jefes del operativo censal informaron que faltaron muchas boletas, por lo que no se pudo empadronar a toda la población⁽⁸⁾.

Se atribuyó la falta de boletas a la confusión de algunas autoridades, aclarando que cada boleta era para una vivienda, alcanzando hasta ocho personas. En tanto, el entonces Director del INE dijo que el inconveniente se debió a la distancia y al tiempo, lo que no permitió cumplir con el horario establecido inicialmente para la distribución del material censal⁽⁶⁾.

Improvisación, confusión y poca preparación para el llenado de boletas por parte de los empadronadores fueron inconvenientes resaltados por los censados.

Incluso hubo quejas por la falta de pago del estipendio a los empadronadores.

Difusión de resultados

La presentación de datos preliminares fue retrasada en cuatro oportunidades. El INE informó que los primeros datos se conocerían una semana después del 21 de noviembre. Luego del empadronamiento, la ministra Caro anunció que el primer reporte se conocería 10 días después del censo. Tras cerrar el empadronamiento en el área rural y las áreas dispersas, el director del INE afirmó que los primeros datos se conocerían en diciembre. Pero los resultados preliminares fueron divulgados el 23 de enero de 2013⁽¹⁰⁾.

Respecto de los resultados definitivos del CNPV 2012, la ministra Viviana Caro in-



formó que éstos se conocerían seis meses después de su realización, en mayo de 2013⁽¹¹⁾; posteriormente se anunció que se trabajaba con “la mejor tecnología disponible para el procesamiento de datos” y que todos los resultados se conocerían a fines de junio⁽¹²⁾. Pero fue el 31 de julio de 2013 cuando se difundieron los resultados definitivos en un reporte resumido.

La ministra anunció que la información desagregada microdata (información de detalle) sería concluida para septiembre.

Procesamiento de datos

El INE manifestó que el proceso post-censal relacionado al manejo informático tenía el propósito de “procesar los datos de forma controlada, de manera que se obtengan resultados correctos, coherentes y oportunos”. Para este efecto, se presupuestaron más de 29,5 millones de bolivianos⁽¹³⁾.

Este proceso es el más cuestionado, debido a la variación de los resultados oficiales respecto a los preliminares. La diferencia fue de -3,5%, un error considerable si se compara con censos anteriores: en 1992 el error fue 1,2% y en 2001 fue -0,07%.

La explicación oficial para esta diferencia fue que para los datos preliminares se hizo una contabilización manual, es decir boleta por boleta; y no se vació toda la información de las boletas. También se afirmó que para entregar el informe preliminar se realizó un conteo de las

“carátulas” y cuando se verificó con la información al interior de la boleta “no había coincidencia”.

Según el proyecto censal del INE, la captura de datos debía ser mediante digitalización manual y escaneado de datos; no una contabilización manual. Además, para la organización y orden de las boletas es vital que el formulario resumen (carátula) esté correctamente llenado.

Otro argumento mencionado fue que “todas las boletas han sido procesadas, pero en el recuento manual no se considera información incompleta. (Para obtener los resultados) se consideró información que fue llenada por boleta –individualmente–, cuando debió ser llenada por familia”. Pero, según el manual del procesamiento de datos del INE, era necesaria, en la fase previa, la preparación de documentos donde se debían separar las boletas sin información, limpiar las boletas y organizarlas en el orden establecido por la hoja resumen⁽¹⁴⁾.

Institucionalización

Desde que se presentó el proyecto censal a la fecha, pasaron por el INE cuatro directores ejecutivos. La más llamativa de las renuncias fue la de Ramiro Guerra, abandonando el cargo a cuatro meses del Censo. Esta renuncia promovió el debilitamiento técnico del proceso y la independencia institucional del INE, y se notó claramente que la ministra de Planificación tomó el mando del proceso.

Diferencias con el proyecto censal

- Según el informe del INE N° 1082/2012-2013 PIE-621, se tenía previsto que, por primera vez en el país, la unidad principal de investigación sería el hogar. La primera publicación de resultados del INE compara resultados y asume el concepto tradicional de vivienda como unidad de investigación principal.
- La actualización cartográfica debía durar 27 meses, según cronograma del proyecto; pero en la práctica este proceso duró seis meses.
- 12 meses antes del empadronamiento debían estar definidos los contenidos temáticos de la boleta censal y manuales operativos. La realidad muestra que el 8 de agosto de 2012 se presentó la boleta y se estaba en pleno proceso de definir los manuales operativos.
- Se tenía previsto un censo piloto y nueve pruebas departamentales. Sólo se realizó el censo piloto en Guaquí.
- Ocho meses antes debía empezar el reclutamiento, selección y capacitación de personal. Este proceso recién comenzó en agosto de 2012.
- La campaña de comunicación debía durar 26 meses; pero la mayor intensidad de difusión fue sólo durante tres meses antes el empadronamiento.
- El proyecto mencionaba dos etapas de capacitación, una denominada capacitación curricular, que tenía como objetivo sensibilizar a los estudiantes de secundaria con anterioridad. Esta etapa no fue cumplida y, en consecuencia, el Ministerio de Educación emitió el instructivo VER/DGES N° 019/2012 que obligó a todas las direcciones departamentales, direcciones distritales, direcciones de unidades educativas, maestros y estudiantes a participar obligatoriamente como agentes censales.
- Se tenía previsto que la captura de datos debía ser mediante digitalización manual y escaneado, pero no se contemplaba el conteo manual.
- El INE reiteró que para fines de octubre se presentaría la base de datos del CNPV 2012.

Notas de referencia: (1) Página Siete 27.08.12 (2) La Razón 30.10.12 (3) La Razón 05.11.12 (4) La Razón 16.11.12 (5) La Razón 15.11.12 (6) La Patria 20.12.12 (7) Cambio 22.10.12 (8) Página Siete 22.11.12 (9) La Razón 22.11.12 (10) Página Siete 27.11.12 (11) El Deber 05/08/12 (12) Página Siete 31.01.13 (13) Respuesta a petición de informe escrito N° 1082/2012-2013 PIE-621 (14) Página Siete 02.08.13.

INE
Instituto Nacional de Estadística

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Según Decreto Ley N° 14100 del Sistema Nacional de Información Estadística, la información proporcionada es CONFIDENCIAL

CAPÍTULO A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIVIENDA
1.1 Copie los datos de la ubicación geográfica que figura en la cartula

1.2 Dirección de la vivienda
Ciudad / Comandada Distrito Ciudad / Comunidad Zona censal Sector Segmento Manzana
Barrio/Zona/Unidad vecinal
Calle, avenida, camino o carretera
Piso Número de departamento

3. En esta vivienda ¿cuántas personas pasaron la noche anterior al día del censo?
(No olvide incluir a niñas, niños, recién nacidos, ancianos y ancianas)
Total personas Hombres Mujeres

CAPÍTULO B. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
1. Tipo de vivienda (Marque por observación)
Casa / Choca / Patachichi ☐ 1
Departamento ☐ 2
Cuarto(s) o habitación(es) separada(s) ☐ 3
Particular ☐ 4

2.2 Número de boleta en la vivienda

4. ¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? ☐ 1 (Sí) ☐ 2 (No)

5. ¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
☐ 1 (Teja)
☐ 2 (Cemento)
☐ 3 (Paja)
☐ 4 (Plástico)
☐ 5 (Otro)



Datos comparativos de los censos 2001 - 2012

(POR DEPARTAMENTO)

	DEPARTAMENTO	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
	BOLIVIA	8.274.325	10.027.262	1.752.937	21,19
●	PANDO	52.525	110.436	57.911	110,25
●	SANTA CRUZ	2.029.471	2.655.084	625.613	30,83
●	ORURO	392.451	494.178	101.727	25,92
●	TARIJA	391.226	482.196	90.970	23,25
●	COCHABAMBA	1.455.711	1.758.143	302.432	20,78
●	BENI	362.521	421.196	58.675	16,19
●	POTOSÍ	709.013	823.517	114.504	16,15
●	LA PAZ	2.349.885	2.706.359	356.474	15,17
●	CHUQUISACA	531.522	576.153	44.631	8,40



Datos comparativos de los Censos

CHUQUISACA	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	531.522	576.153	44.631	8,40
Zudáñez	7.423	11.828	4.405	59,34
Presto	8.892	11.856	2.964	33,33
Villa Alcalá	4.034	4.902	868	21,52
Sucre	214.913	259.388	44.475	20,69
Las Carreras	3.556	4.032	476	13,39
Camargo	14.009	15.484	1.475	10,53
Villa Abecia	3.195	3.514	319	9,98
Huacaya	2.345	2.426	81	3,45
Poroma	16.966	17.349	383	2,26
Yamparaéz	10.013	10.111	98	0,98
Culpina	17.570	17.661	91	0,52
San Lucas	32.109	32.085	-24	-0,07
Mojocoya	7.926	7.919	-7	-0,09
Sopachuy	7.241	7.228	-13	-0,18
Yotala	9.497	9.403	-94	-0,99
El villar	4.585	4.465	-120	-2,62
Ida	8.616	8.389	-227	-2,63
Macharetí	7.386	7.062	-324	-4,39
Azurdy	11.349	10.594	-755	-6,65
Tomina	9.060	8.435	-625	-6,90
Monteagudo	26.504	24.118	-2.386	-9,00
Villa Serrano	12.277	11.159	-1.118	-9,11
Muyupampa	10.748	9.651	-1.097	-10,21
Tarabuco	19.554	16.466	-3.088	-15,79
Tarvita	15.791	13.278	-2.513	-15,91
Huacareta	10.007	8.280	-1.727	-17,26
Padilla	12.562	10.162	-2.400	-19,11
Incahuasi	23.394	14.412	-8.982	-38,39
Villa Charcas*		14.496	14.496	

LA PAZ	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	2.349.885	2.706.359	356.474	15,17
Waldo Ballivián	1.657	5.069	3.412	205,91
Tito Yupanqui	2.213	6.261	4.048	182,92
Nazacara de	267	619	352	131,84
Pacajes	18.016	39.105	21.089	117,06
La Asunta	2.739	5.488	2.749	100,37
Licoma	46.596	80.388	33.792	72,52
Collana	2.927	5.042	2.115	72,26
Ixiamas	5.625	9.401	3.776	67,13
Catacora	1.735	2.881	1.146	66,05
Coroico	12.237	19.397	7.160	58,51
Coripata	11.444	17.586	6.142	53,67
Apolo	13.271	20.217	6.946	52,34
Irupana	11.383	17.276	5.893	51,77
Curva	2.213	3.285	1.072	48,44
Yanacachi	4.250	6.302	2.052	48,28
Teoponte**	7.109	10.447	3.338	46,95
Palos Blancos	16.786	24.636	7.850	46,77
Laja	16.311	23.673	7.362	45,14
Mapiri*	9.633	13.817	4.184	43,43
Charazani	9.161	13.023	3.862	42,16
Desaguadero	4.981	6.987	2.006	40,27
San	6.203	8.672	2.469	39,80
Buenaventura	2.691	3.731	1.040	38,65
Malla	3.733	5.121	1.388	37,18
Mecapaca	11.782	16.027	4.245	36,03
Chulumani	13.204	17.694	4.490	34,00
Cajuata	7.757	10.288	2.531	32,63
Peñachuco	5.115	6.780	1.665	32,55
El Alto	649.958	848.840	198.882	30,60
Aucapata	4.146	5.380	1.234	29,76

Guanay	11.528	14.788	3.260	28,28
Chacarilla	1.566	2.004	438	27,97
Tacacoma	6.269	8.013	1.744	27,82
Luribay	9.004	11.139	2.135	23,71
Caquiaviri	11.901	14.570	2.669	22,43
Colquenchaca	8.020	9.785	1.765	22,01
Sorata	18.932	23.016	4.084	21,57
Pucarani	24.570	29.379	4.809	19,57
Charaña	2.766	3.246	480	17,35
Palca	14.185	16.622	2.437	17,18
Sica Sica	26.818	31.054	4.236	15,80
Papel Pampa	6.053	7.002	949	15,68
Quime	7.338	8.436	1.098	14,96
Ichoca	6.839	7.820	981	14,34
Patacamaya	20.039	22.806	2.767	13,81
Jesús de Machaca	13.247	14.950	1.703	12,86
Achocalla	15.110	16.993	1.883	12,46
Calacoto	8.818	9.879	1.061	12,03
Ayo Ayo	6.981	7.798	817	11,70
Taraco*	5.922	6.598	676	11,42
San Pedro	8.103	8.776	673	8,31
Cuarahuara	11.309	12.189	880	7,78
Tiahuanacu	18.351	19.748	1.397	7,61
Colquiri	9.321	9.985	664	7,12
Tipuani*	11.790	12.365	575	4,88
Sapahaqui	2.580	2.684	104	4,03
Quibaya	8.143	8.352	209	2,57
Ayata	14.586	14.931	345	2,37
Copacabana	4.402	4.500	98	2,23
Santiago de Machaca	3.862	3.880	18	0,47
Comanche	11.338	11.355	17	0,15
Cairoama	12.112	12.104	-8	-0,07
San Pedro de Tiquina	6.093	5.962	-131	-2,15
San Andrés de Machaca*	6.299	6.145	-154	-2,44
Pto. Carabuco	14.885	14.520	-365	-2,45
La Paz	793.293	764.617	-28.676	-3,61
Guaqui	7.552	7.278	-274	-3,63
Caranavi	51.153	48.513	-2.640	-5,16
Yaco	7.866	7.315	-551	-7,00
Umla	9.583	8.775	-808	-8,43
Inquisivi	16.143	14.566	-1.577	-9,77
Callapa	8.099	7.289	-810	-10,00
Coro Coro	11.813	10.628	-1.185	-10,03
Puerto Pérez	7.830	7.028	-802	-10,24
Chuma	12.843	11.461	-1.382	-10,76
Ancoraimas	15.199	13.136	-2.063	-13,57
Mocomoco	17.233	14.748	-2.485	-14,42
Batallas	20.925	17.499	-3.426	-16,37
Achacachi	70.371	46.058	-24.313	-34,55
Puerto Acosta	25.759	12.109	-13.650	-52,99
Chua Cocani*		5.003	5.003	
Huarina*		8.375	8.375	
Santiago de Huata*		7.985	7.985	
Huatajata*		3.927	3.927	
Humanata*		5.184	5.184	
Escoma*		7.186	7.186	
Alto Beni*		10.852	10.852	

COCHABAMBA	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	1.455.711	1.758.143	302.432	20,78
Arbieto	9.438	17.352	7.914	83,85
Sicaya	2.235	3.740	1.505	67,34
Vinto	31.489	51.869	20.380	64,72
Sacaba	117.100	169.494	52.394	44,74

Pasorapa	4.659	6.696	2.037	43,72
Chimoré	15.264	21.623	6.359	41,66
Entre Ríos	22.187	31.307	9.120	41,11
Tiquipaya	37.791	53.062	15.271	40,41
Cuchumuela	1.942	2.702	760	39,13
Villa Rivero	5.857	8.135	2.278	38,89
Villa Tunari	52.886	72.623	19.737	37,32
Sipe Sipe	31.337	41.537	10.200	32,55
Quillacollo	104.206	137.029	32.823	31,50
Colcapirhua	41.980	51.896	9.916	23,62
Cochabamba	517.024	630.587	113.563	21,96
Tacachi	1.076	1.303	227	21,10
Colomi	17.372	20.728	3.356	19,32
Vila Vila	4.591	5.459	868	18,91
Capinota	16.945	19.392	2.447	14,44
Puerto Villarroel	40.790	46.643	5.853	14,35
Totora	12.961	14.618	1.657	12,78
Cliza	19.747	21.743	1.996	10,11
Punata	26.140	28.707	2.567	9,82
San Benito	12.720	13.562	842	6,62
Toko	6.705	7.057	352	5,25
Tolata	5.316	5.542	226	4,25
Santivañez	6.402	6.527	125	1,95
Mizque	26.659	26.680	21	0,08
Omereque	6.071	5.800	-271	-4,46
Tapacari	25.919	24.595	-1.324	-5,11
Tarata	8.715	8.242	-473	-5,43
Sacabamba	4.718	4.366	-352	-7,46
Aiquile	26.281	23.267	-3.014	-11,47
Tacopaya	11.658	10.296	-1.362	-11,68
Pojo	11.515	10.156	-1.359	-11,80
Independencia	26.825	23.535	-3.290	-12,26
Arque	11.806	10.334	-1.472	-12,47
Bolívar	8.635	7.279	-1.356	-15,70
Arani	11.542	9.504	-2.038	-17,66
Pocona	13.488	10.750	-2.738	-20,30
Anzaldo	9.126	7.192	-1.934	-21,19
Vacas	12.511	8.940	-3.571	-28,54
Alalay*	4.931	3.447	-1.484	-30,10
Tiraque	35.017	21.113	-13.904	-39,71
Morochata	34.134	12.797	-21.337	-62,51
Cocapata*		18.076	18.076	
Shinabota*		20.841	20.841	

ORURO	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	392.451	494.178	101.727	25,92
Escara	863	4.223	3.360	389,34
Esmeralda	952	2.702	1.750	183,82
Carangas	353	840	487	137,96
Yunguyo de Litoral	221	514	293	132,58
Cruz	869	1.967	1.098	126,35
Machacamarca	387	727	340	87,86
Sabaya	4.684	8.018	3.334	71,18
El Choro	5.710	8.723	3.013	52,77
Coipasa	616	903	287	46,59
Salinas de García	8.723	11.705	2.982	34,19
Mendoza	201.504	264.683	63.179	31,35
Toledo	7.763	10.149	2.386	30,74
La Rivera	390	509	119	30,51
Belén de Andamarca	1.548	2.016	468	30,23
Huari	10.221	13.153	2.932	28,69
Huanuni	19.428	24.677	5.249	27,02
Turco	4.160	5.207	1.047	25,17
Poopó	6.163	7.587	1.424	23,11
Quillacas	3.305	3.983	678	20,51
Challapata	24.370	29.265	4.895	20,09

OS 2001 - 2012 por municipios



Machacamarcá	4.180	4.820	640	15,31
Choque Cota	1.615	1.850	235	14,55
Santiago de	4.588	5.215	627	13,67
Andamarca	20.619	23.083	2.464	11,95
San Pedro de	4.941	5.531	590	11,94
Totora	1.814	2.003	189	10,42
Chipaya	5.469	5.955	486	8,89
Pazña	8.548	9.221	673	7,87
Corque	2.975	2.973	-2	-0,07
Pampa Aullagas	5.424	5.267	-157	-2,89
Eucaliptus	3.352	3.233	-119	-3,55
Antequera	5.790	5.502	-288	-4,97
Huayllamarca	13.978	12.788	-1.190	-8,51
Soracachi*	5.278	4.183	-1.095	-20,75
Curahuara de	1.650	1.003	-647	-39,21
Carangas				
Huachacalla				

POTOSÍ	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	709.013	823.517	114.504	16,15
Porco	5.959	10.763	4.804	80,62
Mojinete	716	1.180	464	64,80
Uyuni	18.705	29.518	10.813	57,81
Llica	2.901	4.150	1.249	43,05
San Antonio de	1.666	2.284	618	37,09
Esmoruco	2.025	2.759	734	36,25
Urmiri	9.645	12.997	3.352	34,75
Colcha K	2.523	3.371	848	33,61
San Pablo de				
Lipez	24.025	31.602	7.577	31,54
Cotagaita	145.057	189.652	44.595	30,74
Potosí	815	1.060	245	30,06
San Pedro de	10.914	13.894	2.980	27,30
Quemes	20.116	25.451	5.335	26,52
Caiza D	21.794	27.200	5.406	24,80
Pocoata	36.266	44.645	8.379	23,10
Tinquipaya	9.536	11.226	1.690	17,72
Villazón	8.046	9.436	1.390	17,28
Atocha	38.337	44.653	6.316	16,47
Yocalla	12.764	14.666	1.902	14,90
Tupiza	14.165	16.108	1.943	13,72
Tomave	31.037	34.722	3.685	11,87
Chayanta	36.909	40.865	3.956	10,72
Colquechaca				
Llallagua	27.639	30.344	2.705	9,79
S. Pedro de	10.535	10.870	335	3,18
Buena Vista	18.725	19.266	541	2,89
Toro Toro	9.644	9.910	266	2,76
Villa de Sacaca	1.640	1.684	44	2,68
Chaquí	20.536	20.630	94	0,46
San Agustín	5.764	5.679	-85	-1,47
Ravelo	9.030	8.704	-326	-3,61
Acasio	11.298	10.646	-652	-5,77
Caripuyo	4.859	4.545	-314	-6,46
Vitichi	12.754	11.735	-1.019	-7,99
Arampampa	36.821	33.455	-3.366	-9,14
Tacobamba	18.516	16.448	-2.068	-11,17
Betanzos	25.180	21.955	-3.225	-12,81
Ocuri	2.166	1.700	-466	-21,51
Uncía	39.985	20.090	-19.895	-49,76
Tahua		8.019	8.019	
Puna		15.635	15.635	
Chuquihuta*				
Ckochas*				

TARIJA	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	391.226	482.196	90.970	23,25
Caraparí	9.035	15.366	6.331	70,07
Villamontes	23.765	39.800	16.035	67,47
Tarija	153.457	205.346	51.889	33,81
Uriondo	12.331	14.744	2.413	19,57
Villa San Lorenzo	21.375	23.639	2.264	10,59
Entre Ríos	19.339	21.378	2.039	10,54
Yacuiba	83.518	91.998	8.480	10,15
El Puente	10.663	11.354	691	6,48
Yunchará	5.173	5.490	317	6,13
Bermejo	33.310	34.400	1.090	3,27
Padcaya	19.260	18.681	-579	-3,01

SANTA CRUZ	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	2.029.471	2.655.084	625.613	30,83
La Guardia	39.552	89.080	49.528	125,22
Warnes	45.318	96.406	51.088	112,73
San José de	16.599	28.922	12.323	74,24
Chiquitos	8.633	14.205	5.572	64,54
El Puente	31.538	50.558	19.020	60,31
Yapacani	16.984	27.070	10.086	59,39
Ascensión de	3.406	5.052	1.646	48,33
Guarayos	2.028	2.995	967	47,68
Cuevo	5.350	7.390	2.040	38,13
Quirurillas	11.085	15.201	4.116	37,13
Saipina	80.341	109.518	29.177	36,32
Porongo	11.363	15.117	3.754	33,04
Montero	28.520	37.866	9.346	32,77
Fernando	5.660	7.490	1.830	32,33
Alonso*	24.427	32.164	7.737	31,67
Pailón	7.747	10.177	2.430	31,37
San Ramón	37.961	49.652	11.691	30,80
Charagua	14.644	19.103	4.459	30,45
Mairana	15.209	19.798	4.589	30,17
El Torno	17.574	22.845	5.271	29,99
San Pedro*				
Puerto Suarez	4.894	6.342	1.448	29,59
Cuatro Cañadas*	14.522	18.800	4.278	29,46
Carmen Rivero	12.903	16.659	3.756	29,11
Torrez*	1.131.778	1.453.549	321.771	28,43
Concepción	41.412	52.276	10.864	26,23
Puerto Quijarro				
Santa Cruz de la	4.031	5.087	1.056	26,20
Sierra	36.425	45.519	9.094	24,97
San Ignacio de	38.027	47.323	9.296	24,45
Velasco	5.017	6.139	1.122	22,36
Boyube	16.502	20.093	3.591	21,76
Cotoca	15.052	18.324	3.272	21,74
San Julián				
San Rafael	11.316	13.606	2.290	20,24
San Carlos	22.296	26.331	4.035	18,10
Santa Rosa del	5.960	7.026	1.066	17,89
Sara	19.846	23.251	3.405	17,16
San Javier	7.933	9.198	1.265	15,95
Cabezas	13.073	14.415	1.342	10,27
Urubichá				
Mineros	10.273	11.327	1.054	10,26
Pampa Grande				
San Matías				
San Miguel de				
Velasco				
Camiri	30.897	33.838	2.941	9,52

Portachuelo	16.408	17.885	1.477	9,00
Comarapa	14.660	15.877	1.217	8,30
Gutiérrez	11.393	12.273	880	7,72
Samaipata	9.739	10.472	733	7,53
Okinawa Uno	11.661	12.482	821	7,04
San Antonio de	6.293	6.481	188	2,99
Lomerio	15.240	15.641	401	2,63
Roboré	16.837	17.208	371	2,20
Vallegrande	5.283	5.366	83	1,57
Lagunillas	9.131	9.191	60	0,66
San Juan de	2.133	2.135	2	0,09
Yapacani*	13.273	12.879	-394	-2,97
Trigal	6.273	6.069	-204	-3,25
Buena Vista	2.545	2.390	-155	-6,09
Colpa Bélgica*	16.592	14.180	-2.412	-14,54
Postrer Valle	3.366	2.767	-599	-17,80
Gral. Saavedra	2.548	2.076	-472	-18,52
Moro Moro				
Pucara				

BENI	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	362.521	421.196	58.675	16,19
San Javier	2.690	5.202	2.512	93,38
Rurrenabaque	13.668	19.195	5.527	40,44
Trinidad	79.963	106.422	26.459	33,09
San Joaquín	5.452	6.917	1.465	26,87
Reyes	11.127	13.246	2.119	19,04
San Borja	34.363	40.864	6.501	18,92
San Andrés	10.595	12.503	1.908	18,01
Riberalta	75.977	89.003	13.026	17,14
Magdalena	9.908	11.277	1.369	13,82
Baures	5.264	5.965	701	13,32
Huacaraje	3.706	4.111	405	10,93
San Ignacio	20.496	22.163	1.667	8,13
Santa Rosa	9.016	9.395	379	4,20
Guayaramerín	40.444	41.775	1.331	3,29
Loreto	3.859	3.828	-31	-0,80
Exaltación	6.618	6.465	-153	-2,31
Puerto Siles	1.018	945	-73	-7,17
San Ramón	5.927	4.955	-972	-16,40
Santa Ana de	22.430	16.965	-5.465	-24,36
Yacuma				

PANDO	CENSO 2001	CENSO 2012	Variación en número	Variación en %
TOTAL	52.525	110.436	57.911	110,25
Sena	2.240	8.258	6.018	268,66
Santos Mercado	509	1.691	1.182	232,22
Villa Nueva -	993	3.275	2.282	229,81
Loma Alta	740	2.068	1.328	179,46
Nueva Esperanza	1.082	2.991	1.909	176,43
San Pedro	3.471	7.652	4.181	120,46
San Lorenzo	3.810	8.160	4.350	114,17
Puerto Gonzales				
Moreno	3.713	7.948	4.235	114,06
Porvenir	22.324	46.267	23.943	107,25
Cobija	899	1.654	755	83,98
Ingavi	3.145	5.756	2.611	83,02
Filadelfia	1.194	2.173	979	81,99
Bolpebra	2.305	3.909	1.604	69,59
Bella Flor	4.003	6.239	2.236	55,86
Puerto Rico	2.097	2.395	298	14,21
Santa Rosa				

* Municipios creados después del Censo 2001

Fuente: Censo 2001 y Censo 2012 (D.S. N° 1672)

PRECIO Y RESERVAS DE GAS SERÁN TEMAS SENSIBLES DE FUTURO CONTRATO CON BRASIL

El contrato de venta de gas natural a Brasil concluye el año 2019. Aunque faltan seis años, es un tiempo corto para una renegociación difícil que implica garantizar futuros volúmenes de aprovisionamiento y acordar el nuevo precio para el próximo contrato.

Brasil ya ha manifestado su interés de renovar con Bolivia el contrato de compra-venta de gas natural más allá del año 2019; sin embargo, además del precio de la exportación, también es de su interés pactar el plazo del futuro contrato.

En los últimos años, ese país ha intensificado la exploración de reservas hidrocarburíferas en su territorio, inclusive en aguas profundas del pacífico, con interesantes posibilidades; no obstante, todavía no ha logrado la independencia energética ni tiene la suficiente red de transporte (ductos) para abastecer a su mercado interno.

Por otro lado, Bolivia apoya casi un tercio de su presupuesto estatal en

los ingresos por hidrocarburos, pero tiene entre sus dificultades no haber logrado el descubrimiento de nuevos reservorios y tampoco el acceso a nuevos mercados de exportación.

Las bajas inversiones en el sector, la falta de incentivos a las inversiones y de un marco legal de largo plazo son desafíos por superar. En concreto, los ingresos estatales por la explotación de hidrocarburos aún dependen de la venta de gas a Brasil y Argentina.

Para las finanzas públicas bolivianas, así como para el desarrollo del sector, resultaría complicado renegociar un precio de exportación que no esté directamente relacionado con el precio internacional del petróleo, y que podría eventualmente ser ajustado en función a la cotización del precio internacional del gas natural Henry Hub, puesto que, como se aprecia en el gráfico N° 1, éste último es muy volátil y, en los últimos seis años, ha estado muy por debajo de los precios de exportación del gas natural boliviano.

Previendo este efecto, en la reciente participación del presidente Evo Morales en el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), el espacio internacional para el gas natural equivalente a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), Bolivia pidió a los Estados miembros del bloque preservar los contratos a largo plazo, asociar los precios del gas a los del petróleo y profundizar el uso de tecnologías limpias para la producción de este recurso natural.

Al parecer, esta iniciativa busca que los países productores actúen como bloque al momento de definir el precio de exportación de gas natural.

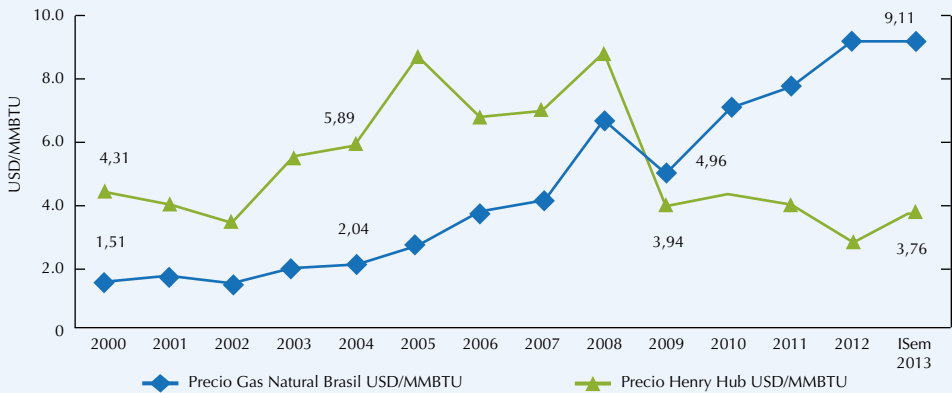
Sin duda, los próximos seis años serán importantes para renegociar el contrato con Brasil; este tiempo servirá para diseñar mecanismos apropiados para la fijación de precios que permitan al país mantener el elevado nivel de ingresos sin sacrificar la competitividad del precio de exportación del gas natural boliviano.

Posiblemente, en las negociaciones pasadas se vinculó el precio del gas al precio internacional del barril de petróleo, porque a finales de los años 90, cuando se negociaba con Brasil, el gas natural no era aún considerado una materia prima internacional que se transe en mercados financieros, aspecto que ha venido cambiando en la última década.

Gas para la exportación

De acuerdo con información oficial de la estatal petrolera, durante el primer semestre del 2013, en promedio, el 84% del gas natural producido fue destinado a la exportación; lo cual denota la relevancia que los mercados

Gráfico N° 1: Precio de exportación de gas natural al Brasil y Argentina versus el precio internacional Henry Hub



Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Energy Administration Information.

de Brasil y Argentina tienen para los ingresos obtenidos por Bolivia por la explotación de hidrocarburos.

En el caso de Brasil, el contrato de compra-venta de gas natural, denominado Gas Supply Agreement (GSA) fue suscrito el año 1996, por un periodo de 20 años. Considerando que las exportaciones se iniciaron en 1999, el contrato vencerá el año 2019.

Si bien en un inicio el volumen contractual fue establecido en 16 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), el mismo fue ajustado mediante diferentes adendas hasta establecer un volumen de 31 MMmcd.

Uno de los aspectos más importantes del contrato Brasil es el mecanismo para la determinación del precio de venta, el cual, según el contrato, es

ajustado trimestralmente en función a la cotización de tres fuel oil que, a su vez, dependen del precio internacional del petróleo. Es decir que el precio de exportación del gas natural boliviano depende del comportamiento del precio internacional del barril de petróleo, el cual muestra una tendencia de incremento desde el año 2004, aspecto que ha permitido al país recibir mayores ingresos económicos.

Como se muestra en el gráfico N° 2, el eje derecho muestra el comportamiento del precio de exportación del gas natural boliviano al Brasil, en tanto que el eje izquierdo muestra el precio internacional del barril de petróleo. De esta manera en el año 1999 cuando el precio internacional del barril de petróleo era de 19,34 \$us/Bbl, el precio de exportación del gas natural

boliviano era de 1,01 \$us/MMBTU. Posteriormente, el año 2005, cuando el barril de petróleo alcanzaba los 56,64 \$us/Bbl en la cotización West Texas Intermediate (WTI) el precio de exportación del gas natural boliviano alcanzó los 2,59 \$us/MMBTU.

En los años sucesivos se observó una tendencia creciente en el precio internacional del barril de petróleo, el cual ha pasado muchas veces los 100 \$us/Bbl, lo cual ha ocasionado que el precio de exportación del gas natural boliviano también haya alcanzado registros históricos en el periodo 2005 – 2013.

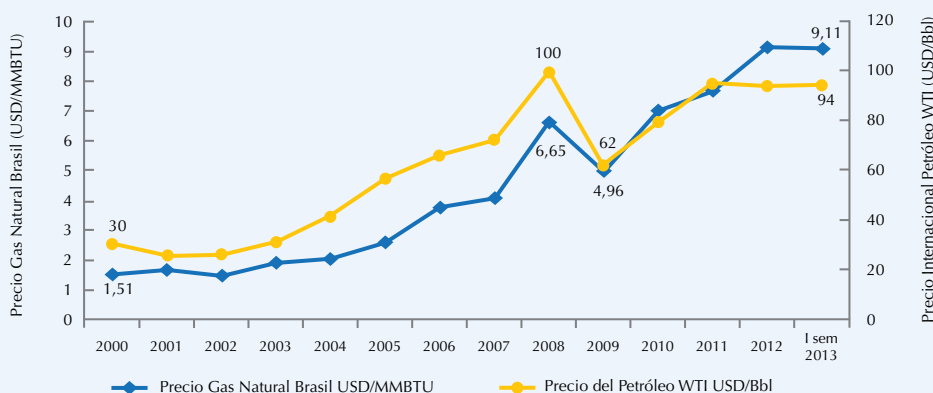
Por otra parte, el contrato de compra-venta de gas natural suscrito el año 2006 entre Bolivia y Argentina establece un plazo de 20 años para la comercialización de gas natural a partir del año 2007 hasta el 2027.

Con relación al precio de exportación del gas natural boliviano a Argentina, al igual que en el caso de Brasil, el mismo es ajustado trimestralmente con base en una fórmula que contempla los mismos tres fuel oils más la adición del precio internacional del diesel oil, lo cual hace que el precio de exportación a Argentina sea mayor que el de Brasil; sin embargo, de igual manera, el comportamiento del precio de exportación de gas natural está influenciado por el precio internacional del barril de petróleo.

Frente a la volatilidad

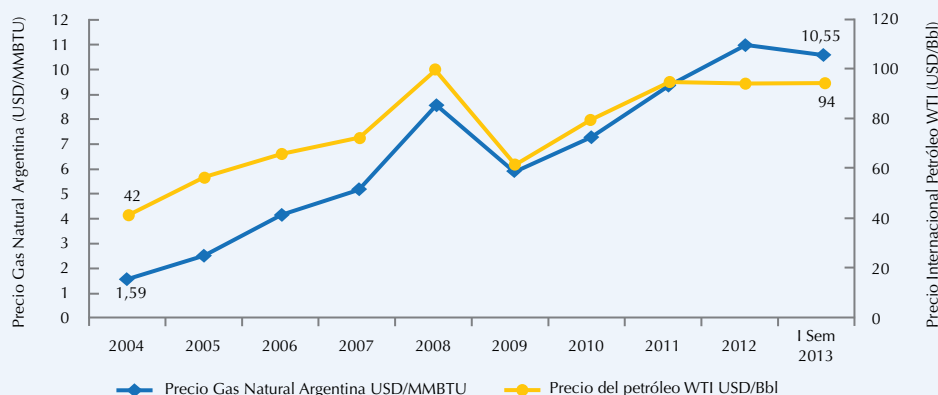
En las condiciones y tendencias del sector de hidrocarburos, resulta cada vez más imperiosa la necesidad de diseñar mecanismos que, de cierta manera, permitan amortiguar la volatilidad de los ingresos del Estado frente a las variaciones de los precios internacionales del petróleo y, además, que permitan al Estado transferir recursos a otros sectores de la economía que generen empleo y valor agregado. Al parecer, el pacto fiscal resulta ser una preciada oportunidad para encontrar un consenso nacional en esta materia.

Gráfico N° 2: Precio de exportación de gas natural a Brasil y precio internacional del barril de petróleo



Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Energy Administration Information.

Gráfico N° 3: Precio de exportación de gas natural a Argentina y precio internacional del barril de petróleo



Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Energy Administration Information.

EXPANSIÓN HIDROCARBURÍFERA SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS ES CONTRARIA A UN ODM

A través de uno de los indicadores de los Objetivos del Milenio, Bolivia se comprometió, hasta el año 2015, a “mantener la proporción de superficie de áreas protegidas nacionales”. Aunque aún no se han sobrepasado los límites, las áreas reservadas para futura exploración y explotación hidrocarburífera están sobre el 35% del territorio natural protegido.

El año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio, cuando representantes de 189 estados signatarios de la Organización de las Naciones Unidas firmaron la Declaración del Milenio, la cual contenía ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que debían ser cumplidos hasta el año 2015. El séptimo objetivo hace referencia a “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”.

Las áreas protegidas de importancia nacional ocupan 15,5% (17.004.796,8 has) del territorio nacional y albergan a

la mayor parte de la biodiversidad del país con la mayoría de los ecosistemas, alrededor de 80% de las especies de plantas superiores y helechos, y entre 65% y 80% de las especies de vertebrados; además, incluyen una parte considerable del patrimonio cultural del Estado. Al revisar la evolución de este indicador, se advierte que hasta el 2011 la superficie de áreas protegidas se mantenía desde el 2003.

En el país hay 22 áreas protegidas, con una extensión total de 17 millones de hectáreas. Al interior de nueve áreas protegidas hay partes que coinciden con áreas de interés para la exploración y explotación de hidrocarburos.

En la región y en el país, existe una tendencia a reducir las áreas protegidas por contener riqueza natural y aumenta la presión para no mantener la superficie en su estado natural. La causa principal está relacionada a la extracción de gas y petróleo.

Según el artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058, “se reservarán áreas de interés hidrocarburífero, tanto en zonas tradicionales como no tradicionales, a favor de YPFB, para que desarrolle actividades de exploración y explotación, por sí o en asociación. Estas áreas serán otorgadas y concedidas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con prioridad y serán adjudicadas de manera directa”.

Bajo este marco, en agosto del 2007, a través del Decreto Supremo N° 29226, se reservaron a favor de YPFB 33 áreas de interés para la exploración y explotación de hidrocarburos. Subsiguientemente, en octubre de 2010, mediante Decreto Supremo N° 676, se reservaron y adjudicaron 23 áreas adicionales, totalizando 56 áreas reservadas a favor de YPFB para actividad petrolera.

Posteriormente, en abril de 2012, se promulgó el Decreto Supremo N° 1203, que amplió a favor de YPFB nuevas áreas reservadas, llegando a un total de 98 áreas, con el fin de incrementar las inversiones y actividades de exploración de hidrocarburos y desarrollo de nuevos campos.

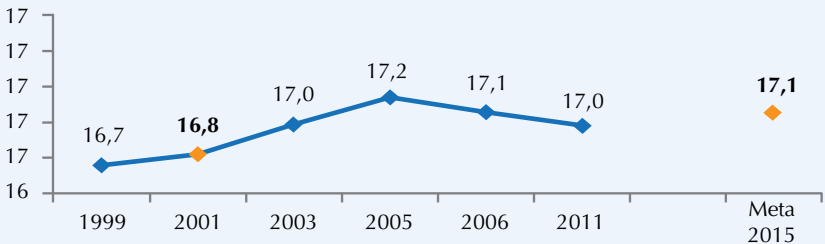
Sin embargo, una vez aprobada esta norma, se observó que parte de esas áreas también se encuentra ubicada en territorios bajo tuición del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

El mapa muestra que en total son 9 áreas protegidas que estarían siendo afectadas por 19 áreas reservadas para hidrocarburos (Ver tabla).

Proporción de superficie de áreas protegidas nacionales

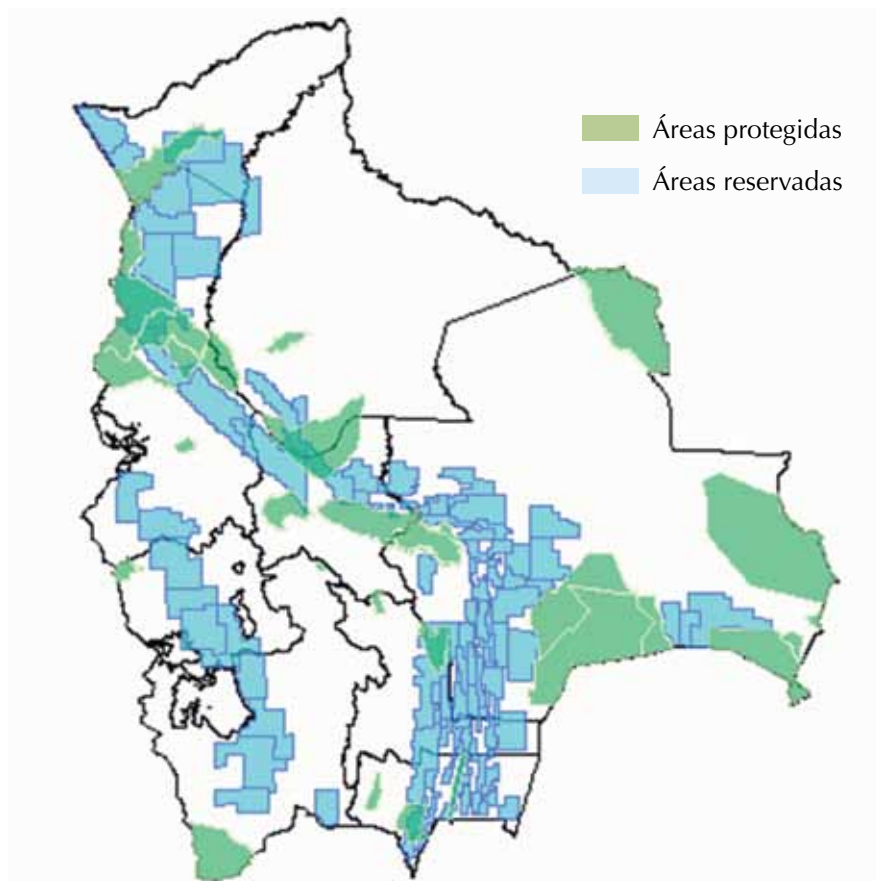
	1999	2001	2003	2005	2006	2011	Meta 2015
Superficie de áreas protegidas (En millones de hectáreas)	16,7	16,8	17,0	17,2	17,1	17,0	17,1

Superficie de áreas protegidas (En millones de hectáreas)



Fuente: UDAPE-SERNAP

Sobreposición de áreas protegidas y áreas reservadas para actividades petroleras



Fuente: Fundación Jubileo - Sistema de Información Geográfica en Hidrocarburos y Decreto Supremo N° 1203, de abril de 2012.

Nº	ÁREA PROTEGIDA	CATEGORÍA	DEPARTAMENTO	ÁREA RESERVADA A FAVOR DE YPFB
1	Manuripi	Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica	Pando	Madre de Dios
2	Madidi	Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado	La Paz	Madidi Chepite
3	Apolobamba	Área Natural de Manejo Integrado	La Paz	Chepite
4	Isiboro Sécore	Parque Nacional y Territorio Indígena	Beni-Cochabamba	Sécure Zona 19 Chispani Sécure Zona 20
5	Carrasco	Parque Nacional	Cochabamba	Isarsama Sécure Zona 20
6	Tunari	Parque Nacional	Cochabamba	Chispani
7	Iñaño	Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado	Chuquisaca	Azero
8	Tariquia	Reserva Nacional de Flora y Fauna	Tarija	San Telmo Huacareta Iñiguazu Astillero
9	Aguaragüe	Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado	Tarija	Aguarague Centro San Martín Aguarague Sur A Aguarague Sur B Sanandita La Ceiba

Fuente: Fundación Jubileo - Sistema de Información Geográfica en Hidrocarburos y Decreto Supremo N° 1203, de abril de 2012.

Al respecto, el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos establece que el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo Sostenible (ahora Ministerio de Planificación) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), previo a las nominaciones de áreas de interés hidrocarburífero, coordinarán actividades en el marco de sus competencias, cuando las mismas coincidan en áreas geográficas; por lo que sería importante conocer el criterio y posición que tuvo el SERNAP al momento de definir las nuevas áreas reservadas destinadas a trabajos exploratorios de hidrocarburos.

Por otra parte, la misma ley, en el artículo 133, dispone que “las actividades relacionadas con el uso de hidrocarburos, en sus diferentes fases, podrán desarrollarse en áreas protegidas en sujeción estricta a la categoría y zonificación, plan de manejo, realización de consulta pública y cumplimiento a disposiciones ambientales, requiriéndose para el efecto un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando no pongan en riesgo sus objetivos de conservación”.

Corresponderá, por tanto, hacer un seguimiento continuo y cercano sobre el cumplimiento de estas disposiciones una vez que los trabajos exploratorios se inicien en áreas protegidas, con el fin de precautelar la preservación de las mismas.

A dos años del 2015, fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se espera que este indicador y la meta se cumplan.

La ONU prepara un sistema para una nueva agenda de desarrollo post 2015, donde se incluye la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales y la salvaguarda de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.

MUNICIPIOS SIN NUEVO CONTROL SOCIAL PONEN EN RIESGO LEGALIDAD EN SU GESTIÓN

Los comités de vigilancia ya no están vigentes. La nueva Ley N° 341 de Participación y Control Social dispuso que “los Gobiernos Autónomos Municipales establecerán por ley municipal, en un lapso no mayor a noventa (90) días, el funcionamiento e implementación de la Participación y Control Social”. Ese plazo venció en julio de 2013.

Muchos municipios todavía no han logrado crear e implementar el control social. Con la Ley N° 341, los representantes del Comité de Vigilancia ya no pueden asumir roles de representación de la sociedad civil ni pronunciarse sobre la gestión y los procesos de planificación y presupuesto del gobierno autónomo municipal, pues es una instancia que ha dejado de existir jurídicamente.

Al existir ese vacío, el primer paso es que cada municipio elabore su propia ley de participación y control social. Mientras no se apruebe esta ley, la sociedad civil organizada no estará representada ante el gobierno municipal.

Las personas elegidas para el nuevo control social podrán ser participantes de cualquier tipo de organización de la sociedad civil. Anteriormente, sólo podían ser electas personas vinculadas a organizaciones territoriales de base, como juntas vecinales o comunidades campesinas. Ahora pueden ser representantes quienes, por ejemplo, provengan de organizaciones de productores, sindicatos, gremiales, mujeres, profesionales y otros actores sociales organizados.

La nueva estructura, composición, funciones y competencias del control social deben ser definidas en la Ley

Municipal de Participación y Control Social que cada municipio debe elaborar con participación de las organizaciones sociales (Art. 241 de la Constitución y Art. 25 de la Ley N° 341 de Participación y Control Social).

Por las tareas que debe cumplir el control social, se pueden crear instancias como una Asamblea Municipal, y rescatar partes de la estructura que tenía el Comité de Vigilancia, pero ampliando la participación a otras organizaciones sociales del municipio. Lo importante es que la ley responda a la dinámica y características de cada municipio.

Si no existe una norma propia del municipio para el ejercicio de la participación y control social se genera un vacío jurídico en la relación entre la gestión municipal y las organizaciones sociales. Este vacío jurídico puede afectar la legitimidad y transparencia de la gestión municipal, pues los servidores públicos municipales y sus autoridades no estarían obligados a promover la participación y control social de la sociedad civil y sus organizaciones.

Por otro lado, los representantes elegidos por la sociedad civil para ejercer el control social no serían atendidos y no tendrían respaldo legal para ejercer su derecho a la participación y control social. Como consecuencias pueden presentarse dificultades en la legitimidad de la planificación municipal y en la ejecución presupuestaria.

En caso de no tener la ley municipal aprobada, la propuesta de ley sobre participación y control social puede ser impulsada por el Concejo, con apoyo del Ejecutivo municipal (Al-

calde), pero también por la sociedad civil, en el marco de la iniciativa legislativa ciudadana.

La importancia del control social es que éste debe pronunciarse sobre el POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto del municipio. La Constitución (Art. 321) señala que “la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal”. Asimismo, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Art. 114) también explica que “los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el concejo municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente”.

En las Directrices de Formulación Presupuestaria 2014, el artículo 17 sobre la presentación del presupuesto institucional aclara que “las entidades públicas deberán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el presupuesto institucional (...) adjuntando la siguiente documentación: a) Disposición legal que apruebe el POA y el presupuesto institucional, emitida por la MAE y/o por la instancia deliberativa o resolutive según corresponda. En el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales, adicionalmente, deberán remitir el pronunciamiento de la instancia de Control Social (...)”.

La Ley N° 341 establece como principios esenciales la independencia y autonomía para el ejercicio de la participación y control social. La ley

los define como la “capacidad de decidir y actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad. Las acciones de la participación y control social no se subordinan a ningún órgano y/o autoridad del Estado, ni recibirá instrucciones o presiones de ningún poder fáctico, que vele por intereses particulares contrarios al interés general”.

En el marco de los alcances “el control social no podrá retrasar, impedir o suspender la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes y actos administrativos; salvo que se demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y al patrimonio del Estado, y a los intereses y derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado. El potencial daño deberá ser determinado por autoridad competente” (Art. 143 de la Ley Marco de Autonomías).

La principal herramienta que cuenta el control social es que tiene la responsabilidad de coadyuvar y complementar a la fiscalización y control gubernamental, donde las denuncias y recomendaciones de la instancia de control social tienen carácter vinculante hacia los servidores públicos para que inicien auditorías, procesos, informes, peritajes técnicos u otras acciones que hagan transparente la gestión pública. (Art. 24, inc II Ley 341 de Participación y Control Social).

La implementación del nuevo control social, con seguridad, tendrá muchos aprendizajes y desafíos; en ese sentido, la nueva normativa plantea al menos tres retos esenciales para las autoridades y para el control social: La rendición pública de cuentas, la planificación participativa que incluye el presupuesto y el ejercicio del control social a la calidad de los servicios públicos y servicios básicos.

SALDO DE DEUDA EXTERNA DEL PAÍS CONTINÚA EN SUBIDA

La deuda externa se registró en aproximadamente \$us 4.399 millones a agosto de 2013, que sumado a la nueva emisión de bonos soberanos —realizada el pasado 16 de agosto—, llegaría a \$us 4.899 millones.

La deuda por bonos soberanos es generada con acreedores privados, como ser inversionistas y bancos de otros países y regiones del mundo.

La deuda no es mala en sí misma, pero depende de las condiciones en las que se la contrate y el uso que se le asigne. En este sentido, las condiciones de esta emisión convierten a estos bonos en la deuda más cara del país, con una tasa de interés de 5,95% y el destino sería infraestructura caminera, el sector que más se beneficia de la inversión pública y de la deuda externa.

El 2012, el país ya recurrió a la emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares y el 2013 emitió nuevamente esos bonos por esa misma cantidad. La tasa de los anteriores bonos fue de 4,875% y, en ambas emisiones, el plazo de pago es de 10 años; es decir que, al cabo de este periodo, el país tendrá que devolver 1.000 millones de dólares prestados.

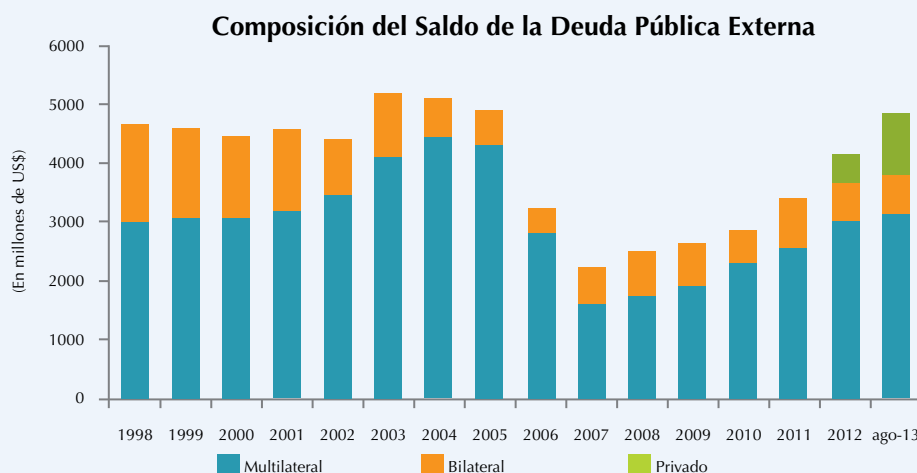
Por ambas emisiones de bonos soberanos el pago de intereses representará, cada

año, cerca de 50 millones de dólares, que se sumarán al promedio de 250 millones de dólares anuales que actualmente paga el país por servicio de deuda.

En términos de indicadores, la deuda externa se ha mantenido entre 15% y 16% del PIB en los últimos seis años, a pesar de su incremento en valores nominales. El hecho de que se mantenga en los mismos niveles como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es explicado principalmente por el crecimiento anual del producto en el país.

En un agregado de toda la deuda pública del país con el sector privado, la deuda interna, conformada por deuda del Sector Público no Financiero con el sector privado, y la deuda del Banco Central de Bolivia por las operaciones de mercado abierto, fue de 4.893 millones de dólares a agosto de 2013. Por tanto, la deuda pública total del país ascendería a 9.792 millones de dólares.

Como el incremento de la deuda externa en el último período ha tenido su origen principalmente en la emisión de bonos soberanos, es importante que en un marco de endeudamiento responsable, con la participación de instancias de control social, se explique la priorización de estos recursos y la razón para acudir a este tipo de fuentes.



EN LA PRIMERA **SEMANA POR LA CREACIÓN** LA IGLESIA LLAMA A UN **CAMBIO** DEL ESTILO DE VIDA

La Iglesia Católica asumió el compromiso de proteger a la persona como elemento fundamental de la Creación, lo que también implica defender la tierra, el agua y el aire como dones de vida que pertenecen a todos.

En el país, ese compromiso está expresado en la Carta Pastoral sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano en Bolivia “El Universo, Don de Dios para la Vida”. La Conferencia Episcopal Boliviana definió que este año la “Semana por la Creación” se celebre entre el 29 de septiembre al 4 de octubre de 2013.

La elección no ha sido al azar, al tratarse de una fecha importante en el calendario de la Iglesia: 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, a quien el Papa Juan Pablo II proclamó patrono de los ecologistas en 1979, por ser un ejemplo de respeto y amor por la creación.

Los obispos de Bolivia consideran esencial para la identidad cristiana profundizar el respeto y cariño a la ecobiodiversidad. Por esta razón, la Semana por la Creación es ese espacio de comunión en el que los agentes de pastoral: laicos, religiosas y sacerdotes; parroquias, instituciones católicas, grupos eclesiales, movimientos espirituales, iglesias históricas y comunidades cristianas en Bolivia; pero también la sociedad civil logren una “gran alianza por la creación”.



El mensaje esencial es la defensa de la vida de la humanidad, en armonía con el medio ambiente. En todos los espacios y encuentros eclesiales y civiles, la Iglesia Católica llama a crear conciencia por la protección del medio ambiente y por otro tipo de manejo de los recursos naturales, promoviendo una profunda reflexión a través de actividades de sensibilización, información, capacitación o movilización a favor de los dones de la Creación.

Algunas personas, entre ellas muchos cristianos, han empezado a vivir un estilo de vida austero y sobrio, a priorizar la riqueza de las relaciones humanas y a buscar más armonía con la naturaleza, renunciando a una vida impulsada por el consumo y el tener más.

Aún así, son pocos todavía los que asumen la responsabilidad ecológica en

su vida diaria. A su vez, se valoran las múltiples iniciativas de la sociedad civil que promueven la toma de conciencia de la ciudadanía y, sobre todo, de los actores políticos en cuanto a la urgencia de precautar el medio ambiente.

En esta primera “Semana por la Creación”, se ha convocado a toda la población a un cambio de mentalidad con relación al entorno natural, para invertir actitudes, a asumir otros estilo de vida y otro sistema económico y político.

Como pueblo del Dios Creador, la Iglesia asume estar a la vanguardia en la protección del planeta, dando un testimonio humilde y comprometido.

Más información y adhesiones en: www.alianzaporlacreacion.org o en el facebook: Alianza por la Creación.

Director Ejecutivo:

Juan Carlos Núñez V.

Coordinador General

Waldo Gómez R.

Responsable de edición:

Jorge Jiménez Jemio

fundajub@entelnet.bo

www.jubileobolivia.org.bo

Dirección:

Edif. Esperanza

Av. Mcal. Santa Cruz 2150, Piso 2

Casilla 5870 – La Paz, Bolivia

Tel: (591-2) 2125177 – 2311074

Equipo técnico:

René Martínez

Patricia Miranda

Jaime Pérez

Herbert Irahola

Raúl Velásquez

Irene Tokarski

Célica Hernández

Wilson Gisbert

Bernarda Sarue

Angélica Canavire

2013

Administración:

Mirian Clavijo

María Apaza

Olga Machicado

Distribución:

Amparo Mallea

Raquel Ortuño

Pamela Pizarro

Publicación con apoyo de

KZE-Misereor Alemania,

Oxfam

D.L. 4-3-61-12

